



Entrevista

En Entrevista en Palabra de Iquiqueño en Longino TV



“Tarapacá es una región estratégica, pero necesita condiciones preferentes para volver a competir”

Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, analiza el presente de la industria regional, el impacto del alza de los combustibles, la pérdida de competitividad de la Zona Franca, el bajo desarrollo de la pequeña minería y la urgencia de construir una agenda común entre autoridades, gremios y parlamentarios para proyectar el norte como un polo de inversión, empleo y desarrollo.

La Región de Tarapacá vive una paradoja que atraviesa buena parte de su historia reciente. Tiene minería metálica y no metálica, puertos, zona franca, logística, energía solar, borde costero, cercanía con Perú, Bolivia y Argentina, potencial turístico, proveedores locales y una ubicación geopolítica privilegiada. Sin embargo, buena parte de esas ventajas aún no logra transformarse en una estrategia robusta de desarrollo productivo. Esa es una de las principales preocupaciones que plantea Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, en conversación con el programa Palabra de Iquiqueño, de Longino TV. Abogado de profesión, con estudios de posgrado en comunicación empresarial, exseremi del Trabajo y con experiencia en el mundo gremial, Gómez sostiene que Tarapacá requiere con urgencia una política de Estado que reconozca sus particularidades como zona extrema. A su juicio, el centralismo, la falta de continuidad de las políticas públicas, la pérdida de competitividad de instrumentos históricos como ZOFRI, las restricciones tributarias y aduaneras, además del impacto del alza de combustibles, configuran un escenario complejo para la industria regional. Pero también advierte que la región tiene una oportunidad: articular un

bloque político, económico y social capaz de exigir condiciones preferentes para invertir, producir y generar empleo. Un abogado al frente del mundo industrial Marcos Gómez Barrera es abogado, titulado en la Universidad Andrés Bello, con estudios de magíster y doctorado vinculados a la comunicación empresarial, desarrollados en la Universidad Arturo Prat. Fue director de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios, seremi del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y ha tenido una trayectoria vinculada al mundo laboral, empresarial y gremial. Hoy encabeza la gerencia general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, entidad que agrupa a empresas mineras, pesqueras, portuarias, logísticas, de transporte, manufactura, metalmecánica, maestranza, proveedores locales y actores relevantes del ecosistema económico regional.

¿Por qué un abogado llega a ser gerente general de una asociación industrial? ¿Cuál es la relación entre el derecho y el mundo productivo? La profesión de abogado es una profesión muy versátil. Uno puede hacer muchas cosas más allá del ejercicio tradicional del derecho,

que normalmente se asocia con los tribunales, la litigación o el conflicto. La formación jurídica entrega una gama de conocimientos que permite desenvolverse en distintos ámbitos, desde lo laboral hasta lo tributario, lo gremial, lo empresarial y lo institucional. En mi caso, siempre estuve muy vinculado al mundo laboral. Fui abogado de empresas transportistas en Santiago, también del Colegio Médico, donde además trabajamos en la conformación de su Tribunal de Ética. Posteriormente llegué a Iquique, trabajé en la universidad, fui director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá y luego fui invitado a participar en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera como seremi del Trabajo. Ese recorrido me fue acercando al funcionamiento de las empresas, a sus necesidades, a sus estructuras internas, a la organización del trabajo y a la relación entre oferta y demanda laboral. Después fui invitado a participar en el proyecto gremial de la Asociación de Industriales, que era un trabajo muy interesante porque permitía vincular empresas, generar sinergias, buscar oportunidades y alejarse un poco del conflicto permanente, que también es parte de nuestra condición humana, pero que puede ser desgastante.

El mundo gremial me permitió mirar el desarrollo productivo desde otra perspectiva. Eso sí, tuve que estudiar muchas cosas que a los abogados no nos enseñan. A nosotros no nos enseñan balances, finanzas ni estructuras empresariales en profundidad. La verdad es que nunca fui especialmente hábil para las matemáticas, pero tuve que aprender, porque para entender la industria hay que comprender también sus números, sus costos y sus condiciones de operación.

¿Qué representa hoy la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal dentro de la economía regional? La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal agrupa a un conjunto muy diverso de empresas. Tenemos presencia de la gran minería metálica y no metálica, junto con su cadena de proveedores locales. También están las empresas pesqueras que quedan en la región, la industria logística, las empresas portuarias, como EPI e ITI, compañías de transporte, manufactura, metalmecánica, maestranzas y ZOFRI S.A., que es distinta de los usuarios de zona franca, quienes tienen su propio gremio. La asociación tiene alrededor de 200 empresas, entre pymes y grandes compañías. En términos de impacto laboral, si consideramos que la fuerza

laboral de Tarapacá bordea los 200 mil trabajadores, nuestro ecosistema puede vincularse directa o indirectamente con cerca de 120 mil trabajadores. Eso muestra la importancia que tiene el gremio, no solo para las empresas, sino también para la economía de los hogares. Porque la industria no son solamente los dueños o los directorios. Detrás de cada empresa hay trabajadores, colaboradores, proveedores, familias, contratos, servicios y una cadena económica que termina impactando en la vida cotidiana de muchas personas. Por eso digo que la industria es una cadena. Cuando una empresa crece, también se benefician quienes trabajan con ella, quienes le prestan servicios y quienes dependen de ese movimiento económico.

Usted ha señalado que Tarapacá tiene enormes potencialidades que aún no han sido desarrolladas. ¿Dónde están esas oportunidades? Tarapacá es una región llena de potencialidades que todavía no hemos explorado ni desarrollado completamente. Tiene minería, energía solar, logística, puertos, comercio, turismo, borde costero, cercanía con otros países y una ubicación estratégica en el norte de Chile. Sin embargo, esas condiciones no bastan por sí solas. Hay que transformarlas en

políticas concretas, en infraestructura habilitante, en incentivos y en planificación. La minería sigue siendo una actividad central, pero también hay que mirar la industria energética. Chile, y particularmente el norte, tiene una capacidad enorme para la generación de energía solar. Hace algunos años participé en una reunión con el Banco Mundial, donde se planteaba que Chile podía convertirse en una especie de “Arabia Saudita” de la energía, por su capacidad de producir energía eléctrica en pequeños territorios mediante energía fotovoltaica o termosolar. También está el hidrógeno verde, la posibilidad de exportar energía, el desarrollo de nuevas industrias asociadas a la tecnología y la necesidad de fortalecer la infraestructura para que esas inversiones lleguen. Pero para eso se requieren políticas de gobierno que generen condiciones atractivas, tanto para capitales nacionales como internacionales. La pregunta es muy simple: si alguien quiere instalar una industria, ¿por qué elegiría Tarapacá si acá todo es más difícil, más caro y más complejo? Esa es la pregunta que debemos responder con políticas públicas. Hoy tenemos problemas de permisología, costos, contribuciones, transporte, aduanas, energía y distancia. Si no

generamos condiciones preferentes, la inversión se va a ir a lugares donde sea más fácil operar.

Uno de los temas que ha golpeado con fuerza al sector productivo es el alza de los combustibles. ¿Qué impacto tiene eso en la industria regional?

El combustible es un elemento crítico. En una región como Tarapacá, donde las distancias son grandes y muchas actividades productivas se desarrollan lejos de los centros urbanos, el petróleo impacta prácticamente todos los costos. La minería requiere transporte, la pesca requiere transporte, los puertos tienen efectos asociados, la logística depende del movimiento de carga y hasta el turismo se puede ver afectado por una menor movilidad local o por el encarecimiento de los viajes.

Mucha gente puede decir: "Yo no uso auto, ando en bicicleta". Pero el problema es que casi todos los productos que consumimos llegan por transporte. Las frutas, las verduras, los artículos de supermercado, los materiales de construcción, los insumos industriales, todo se mueve en camiones de distinto tamaño. Si sube el combustible, sube la cadena completa.

Eso genera una presión inflacionaria compleja. El IPC se ve afectado, los costos de producción aumentan y las empresas tienen que adaptarse. El Gobierno ha anunciado algunas medidas de carácter social, pero nosotros estamos esperando medidas desde el punto de vista productivo, especialmente para la macrozona norte y para las zonas extremas.

En Tarapacá no tenemos las mismas condiciones que otras regiones. Acá no se usa parafina para calefacción como en el sur, el transporte público tiene una realidad distinta y las necesidades productivas son diferentes. Todo es más difícil y más caro porque hay que traerlo, moverlo y trasladarlo. Y eso se hace, principalmente, con combustibles.

¿Qué medidas deberían estudiarse para enfrentar este escenario de mayores costos?

Hay que reestudiar varios instrumentos. En primer lugar, las medidas para zonas extremas deben ser revisadas con seriedad. Existen beneficios como el Decreto 889, que incentiva la contratación de mano de obra local, pero su uso es muy limitado y no alcanza a todos los sectores productivos. Hay actividades que no pueden utilizarlo, como los servicios financieros, las compañías mineras o

las compañías pesqueras, por ejemplo.

También hay que mirar instrumentos como el DFL-15, que permite apoyar inversiones locales, pero que necesita fortalecerse. Hay que revisar las condiciones tributarias y aduaneras, porque hoy muchas de las herramientas que en algún momento fueron pensadas para impulsar el desarrollo regional han ido perdiendo fuerza o incluso se han transformado en obstáculos.

Lo mismo ocurre con ZOFRI. La Zona Franca fue un instrumento de apalancamiento del desarrollo regional, pero ha ido perdiendo competitividad internacional porque el mundo cambió. El comercio global evolucionó, las tecnologías cambiaron, los modelos logísticos se transformaron y la zona franca debe repensarse para adaptarse a ese nuevo escenario.

No podemos seguir con instrumentos diseñados para otra época sin revisarlos. Necesitamos políticas de Estado, no medidas aisladas de cada gobierno. El problema de Chile es que muchas veces un gobierno instala una política y el siguiente la cambia o la abandona. Eso impide continuidad. Durante varias décadas hubo políticas de Estado que permitieron buenos resultados económicos. Hoy necesitamos recuperar esa lógica.

Usted ha planteado que Tarapacá debe articular un bloque regional de mayor fuerza. ¿Quiénes deberían participar en ese esfuerzo?

Aquí tienen que estar todos. El Gobierno Regional, los municipios, los parlamentarios, las autoridades sectoriales, los gremios, las empresas y también el Gobierno central. Nosotros ya hemos planteado la necesidad de formar comités de trabajo que permitan evaluar propuestas concretas para la región.

No basta con que los gremios se junten con una autoridad. Deben estar los parlamentarios, porque muchas normas requieren iniciativa del Ejecutivo o modificaciones legales. Debe estar el Ministerio de Hacienda, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y los ministerios sectoriales que inciden en la actividad productiva. Nosotros le planteamos a la delegada presidencial la necesidad de avanzar en esa línea, porque ella representa al Presidente de la República en la región y tiene una función natural de coordinación de carteras. Pero también se requiere que los parlamentarios estén encima de estos temas.

La mejor política social es un adecuado y equitativo desarrollo económico. Si una región genera empleo, inversión y oportunidades, eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Por eso necesitamos unirnos como región y decirle al nivel central que Tarapacá tiene condiciones distintas y, por lo tanto, requiere medidas distintas.

¿El centralismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del norte?

Sí, el centralismo es asfixiante. Tarapacá aporta al Estado chileno desde la minería, desde el comercio, desde la logística y desde distintas actividades productivas, pero muchas veces las decisiones se siguen tomando con una mirada demasiado centralista, sin comprender las particularidades del territorio.

Somos una región extrema, fronteriza, cercana a Perú, Bolivia y Argentina, ubicada en una zona clave dentro del triángulo del litio, con cobre, sal, energía solar, puertos y un rol geopolítico evidente. Lo mismo ocurre con Arica, con Antofagasta, con Atacama, con Aysén o Magallanes. Son regiones estratégicas, pero muchas veces se les trata como si tuvieran las mismas condiciones que una región del centro del país.

Por eso creo que debemos unirnos más con Arica, con Magallanes, con Aysén y con otras regiones extremas. Cuando una sola autoridad regional va a plantear un problema a Santiago, puede ser escuchada o no. Pero cuando van varias regiones, con sus gobernadores, parlamentarios y gremios detrás, la voz pesa distinto. Tarapacá necesita patear más, en el buen sentido. Necesita exigir con argumentos, con datos y con propuestas. No se trata de reclamar por reclamar, sino de demostrar que, si se generan condiciones preferentes, la región puede aportar mucho más al país.



Entrevista



En la entrevista usted también mencionó la necesidad de mirar con más fuerza la pequeña y mediana minería. ¿Qué está faltando en ese ámbito?

En Tarapacá hemos perdido algo que es fundamental: el poder de compra para la pequeña minería. En regiones como Atacama hay una tradición de pequeños mineros y piquineros que pueden entregar su material para procesamiento. En el norte también existían alternativas como Pampa Camarones o Tocopilla, pero hoy, con los costos del petróleo y la falta de infraestructura, muchas de esas posibilidades se hacen prácticamente inviables. Eso limita mucho el desarrollo de la pequeña y mediana minería. Tenemos sectores con potencial de cobre, sal y otros minerales, pero muchas faenas no pueden desarrollarse porque no existe capacidad local suficiente para procesar, comprar o dar salida económica a esa producción.

Ahí hay una tarea para el Ministerio de Minería y el Ministerio de Economía: fomentar plantas de proceso a nivel local, generar infraestructura habilitante y permitir que pequeños proyectos puedan crecer. No todo puede depender de la gran minería. La pequeña y mediana minería también puede generar empleo, proveedores locales, dinamismo territorial y oportunidades para comunas que hoy tienen pocas alternativas.

Tarapacá tiene un borde costero relevante, potencial para plantas desaladoras, cercanía con zonas mineras y capacidad logística. Si eso se coordina bien, se puede abrir un espacio importante para nuevos desarrollos productivos.

¿Cómo se conecta el trabajo de un gremio industrial con la vida diaria del ciudadano común?

A veces la ciudadanía ve a los gremios como algo lejano, como una estructura empresarial distante. Pero en realidad el trabajo gremial tiene efectos concretos en la economía cotidiana. Cuando una empresa crece, contrata trabajadores. Cuando una faena se activa, se necesitan proveedores. Cuando un puerto se mueve, hay transporte, servicios, logística, alimentación, mantenimiento y comercio asociado.

Nosotros somos un gremio y nuestra función es generar condiciones para el desarrollo económico de las empresas asociadas y del ecosistema productivo. Eso incluye minería, logística, pesca, servicios, proveedores, construcción, transporte y otras actividades.

También formamos parte del Consejo de SOFOFA y tenemos relación con otros gremios de la macrozona norte, como la Asociación de Industriales de Antofagasta, Corpora, Cidere y Asinda. Eso nos permite levantar una voz regional y macrozonal. Porque muchos de los problemas que vivimos en Tarapacá también los viven Arica, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El ciudadano debe entender que el empleo no aparece solo. El empleo requiere inversión, condiciones, reglas claras, infraestructura y costos razonables. Si no existen esas condiciones, las empresas no invierten, los proveedores se debilitan y la economía familiar termina resintiéndose.

¿Qué rol debería cumplir ZOFRI en esta nueva etapa de desarrollo regional?

ZOFRI debe repensarse. Fue y sigue siendo un instrumento muy importante para Tarapacá, pero necesita adaptarse a un mundo distinto. La zona franca no puede quedar atrapada solamente en una lógica comercial tradicional. Debe mirar manufactura, logística, valor agregado, encadenamientos productivos y nuevas formas de comercio internacional.

Hoy hay proveedores que fabrican en la región y luego enfrentan problemas aduaneros para mover sus productos hacia otras regiones. Hay casos donde alguien quiere reciclar neumáticos fuera de uso, generar manufactura local o producir bienes con valor agregado, y termina enfrentando barreras tributarias o aduaneras que desincentivan la industria local.

Eso es contradictorio. Si queremos más industria, debemos

revisar la normativa aduanera y tributaria para que no castigue a quien produce en Tarapacá. No puede ser más difícil fabricar acá que importar y vender. Si eso ocurre, estamos desincentivando justamente lo que decimos querer promover.

ZOFRI debe seguir siendo una herramienta de desarrollo regional, pero no puede operar con la misma lógica de hace décadas. Necesita modernización, coordinación con Aduanas, visión productiva y una estrategia que permita atraer inversión, no solo sostener comercio.

¿Qué mensaje dejaría a las autoridades regionales y nacionales frente al futuro de Tarapacá?

El mensaje es que Tarapacá tiene una oportunidad enorme, pero necesita apoyo real. No basta con reconocer que somos una región estratégica; hay que actuar en consecuencia. Necesitamos condiciones preferentes, infraestructura habilitante, revisión tributaria y aduanera, fortalecimiento de instrumentos de inversión y una política clara para zonas extremas.

Las compañías mineras, los proveedores, los puertos, la logística, la pesca, ZOFRI y las empresas locales pueden aportar mucho más si existen condiciones adecuadas. Las empresas también entienden que su mejor política de responsabilidad social es generar focos de desarrollo donde están instaladas. Crear empleo, fortalecer proveedores locales y contribuir al desarrollo territorial es parte esencial de esa responsabilidad.

Pero para eso se requiere apoyo del Gobierno central y del Gobierno Regional. También se requiere que los parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales y gremios trabajen juntos. La política tiene sus diferencias, y eso es legítimo, pero una región no puede perder cuatro años en discusiones menores. Hay que instalar una agenda común.

Ojalá que en algunos años, cuando volvamos a mirar esta conversación, al menos una parte de estas proyecciones se haya materializado. Si logramos avanzar en un 10% de todo lo que Tarapacá puede hacer, ya sería un paso importante. Pero para eso debemos comenzar ahora.

La conversación con Marcos Gómez deja instalada una advertencia que trasciende al mundo empresarial: Tarapacá no puede seguir viviendo solo de sus potencialidades. La región tiene minería, puertos, energía, comercio, frontera, talento local y posición estratégica, pero esas ventajas requieren una arquitectura pública y privada capaz de transformarlas en desarrollo efectivo. El diagnóstico es claro. El alza de los combustibles presiona los costos de toda la cadena productiva. La Zona Franca necesita actualizar su modelo. La pequeña y mediana minería requiere poder de compra e infraestructura. La industria local enfrenta trabas tributarias y aduaneras. Y las zonas extremas siguen esperando una política de Estado que reconozca sus diferencias reales frente al centro del país.

Pero la entrevista también plantea una ruta. Tarapacá debe construir una voz común. Autoridades, gremios, empresas, parlamentarios, municipios y Gobierno Regional tienen la posibilidad de levantar una agenda que no dependa del ciclo político de turno, sino de una visión de largo plazo. Una agenda que entienda que el empleo no nace de los discursos, sino de la inversión, de la infraestructura, de la certeza regulatoria y de la capacidad de competir.

En tiempos de incertidumbre económica, la región necesita algo más que diagnósticos. Necesita decisión. Porque si Tarapacá es estratégica para Chile, como tantos discursos han repetido, entonces debe ser tratada como tal. Y eso significa entregar condiciones para producir, invertir, innovar y generar trabajo en un territorio que, pese a sus dificultades, sigue teniendo una de las mayores capacidades de desarrollo del norte grande.